

*Invitado especial a disertar en la Asamblea 52, en Los Angeles, California, el martes 8 de octubre de 1996, asistió el politólogo, docente universitario y escritor mexicano Jorge Castañeda Gutman, Ministro de Relaciones Exteriores de México (2000-2003).*

## **Jorge Castañeda**

Los seis casos de periodistas asesinados que nos documenta y recuerda la investigación realizada por la Sociedad Interamericana de Prensa dan frío en la espalda y temor en el corazón a quienes nos dedicamos a la palabra escrita.

Los seis crímenes cometidos, en Colombia, Guatemala y México, esgrimidos a la vez como casos de importancia intrínseca y como prendas emblemáticas de una aterradora y conocida tendencia en América Latina, nos llenan de horror y tristeza: horror porque le puede suceder a cualquiera de nosotros, tristeza porque sabemos bien que así ha sido en nuestra región, desde tiempos inmemoriales.

Matan a un periodista: las sociedades latinoamericanas, que han padecido este golpe artero tantas veces, captan con sensibilidad y sabiduría la magnitud de la afrenta a la paz, a la dignidad y a la voluntad de vivir de nuestras naciones. Son, a final de cuentas, nuestros verdaderos magnicidios, porque se repiten, porque simbolizan las muertes de muchos otros, y porque en alguna parte, tocan una fibra terriblemente frágil y álgida de la precaria existencia democrática de América Latina.

Jorge Carpio Nicole e Irma Flaquer Azurdia en Guatemala, Guillermo Cano Isaza y Carlos Lajud Catalán en Colombia, Héctor Félix Miranda y Víctor Manuel Oropeza Contreras en México representan, así, mucho más que seis bajas incidentales en la vieja guerra latinoamericana contra la violencia, contra las fracturas sociales que la generan y contra la impunidad que la abriga. Por un lado, la humildad se impone: son miles y en ocasiones y en ciertos países, decenas o centenares de miles, de ciudadanos que pierden la vida por la violencia política, común o generalizada. Los periodistas no deben nunca olvidar que sus víctimas y mártires engrosan las filas interminables de otros caídos: los desaparecidos y degollados, los secuestrados y asesinados, los ultrajados y desterrados, productos todos de la larga noche latinoamericana de violencia.

Pero por otra parte, los periodistas hacen bien en subrayar la singularidad de su desgracia: por el papel que desempeñan en nuestras democracias en ciernes, o canceladas; por su combate insustituible a algunas de las plagas más notorias del hemisferio; por la indefensión que sufren en contraste con los riesgos que corren; y por la impunidad que en tantas ocasiones suele acompañar los crímenes que los abaten.

Los periodistas en América Latina aciertan al destacar su derecho a la excepcionalidad. Convendría revisar cada uno de estos factores de la diferencia que

define el estatuto peculiar del periodismo en América Latina. El primero, sin duda el más reseñado, y provisto de una connotación histórica. Reside en la función crucial que cumple la prensa en la construcción de una esquiua democracia latinoamericana. Explica en muchas ocasiones tanto la multiplicidad de atentados contra los periodistas y contra la libertad de expresión, como la repercusión de dichos atropellos y abusos en nuestros países y en el mundo entero. Los países al sur del Río Bravo poseen todos, en un grado u otro, una característica común: la llamada sociedad civil ha sido secular y crónicamente débil. Desde la remota época de la colonia, en todas nuestras patrias, hemos tenido más Estado que sociedad; los partidos, los sindicatos, las asociaciones cívicas y ciudadanas han enfrentado constantes y patéticas debilidades ante el abrumador poderío de Estados no siempre fuertes en sí mismos, pero nunca en desventaja ante sociedades inermes.

Los periodistas representan, en nuestras democracias incipientes, una de las primeras líneas de batalla y de defensa. Son, con frecuencia, los primeros en censurar los golpes de Estado, los fraudes electorales y las interrupciones recurrentes de la legalidad civil y constitucional que por desgracia pueblan nuestro paisaje político. Y una vez restaurada o inaugurada una democracia insegura, se erigen en el valladar inicial de la resistencia ante los embates que sufre, o el estímulo principal de su ampliación o consolidación. De tal suerte que cuando asesinan a un periodista en América Latina, muere también una pequeña parcela de la democracia, del estado de derecho, de la libertad y de la aspiración a la igualdad en el continente. Por eso, en nuestras tierras más que en otras, son indisociables las luchas por la democratización de la vida política y para abolir la violencia ejercida contra la prensa y la expresión.

Un segundo elemento que explica la consternación que genera en nuestras latitudes la eliminación física de los periodistas --los seis a los que está dedicado esta investigación, así como a los demás sacrificados en esta lucha: Pedro Joaquín Chamorro, Manuel Buendía, José Carrasco, Manuel de Dios Unanue, Don Bolles, con el afán de recordar a algunos más-- es el funcionamiento mismo de la democracia en estas naciones, cuando llega a imperar.

La separación de poderes en América Latina siempre ha sido más formal que otra cosa; por ende, la responsabilidad de los gobernantes ante la sociedad se ha visto siempre viciada por la flaqueza de las instituciones supuestamente encargadas de fiscalizar, acotar y regular el comportamiento de las autoridades.

En el combate a la corrupción, al narcotráfico, al mal gobierno, a las violaciones de los derechos humanos, el periodismo latinoamericano ejerce un poder muy superior al del *watchdog* o cuarto poder anglosajón. Sin la prensa, en muchos de nuestros países, nadie denunciaría los excesos, los robos, el contubernio con el narco, el desprecio persistente por los derechos humanos, los fraudes electorales, y la simple y llana ineptitud gubernamental.

En todas las coyunturas de denuncia exitosa de la corrupción en países con un régimen democrático mínimamente viable --Collor de Mello en Brasil, Carlos Andrés Pérez en Venezuela, Jorge Serrano en Guatemala-- la prensa coadyuvó de manera sobresaliente al desenlace deseable: el castigo y la expulsión del poder de los mandatarios delictuosos. En aquellos casos en los cuales la corrupción ha sido repetidamente denunciada, pero sin que las revelaciones desemboquen en sanciones penales o políticas --Carlos Salinas de Gortari en México, Carlos Saúl Menem en Argentina-- la prensa también se ha colocado en la vanguardia de esa lucha.

La situación es análoga en lo tocante a esa otra perenne plaga latinoamericana, a saber, la violación sangrienta y repetida de los derechos humanos. Los asesinatos estudiados en este volumen son sintomáticos, mas no únicos: las denuncias periodísticas de torturas y desapariciones, de ejecuciones sin juicio y de encarcelamientos arbitrarios a lo largo y ancho de toda la región, representan algunos de los momentos estelares del oficio de informar. No sólo en la penumbra como sureña de autoritarismo y excesos, sino también durante las inagotables guerras centroamericanas, y la prolongada lucha mexicana por desterrar para siempre los abusos de casi setenta años de unipartidismo priísta, la prensa ha tenido un papel ejemplar. Sin ella, habrían muerto muchos más argentinos y chilenos, salvadoreños y chiapanecos, nicaragüenses y colombianos. Ya sea en ausencia de partidos políticos y sindicatos fuertes, ya sea en condiciones de su prohibición y amordazamiento, la prensa ha solido fungir como defensor de último recurso ante los embates autoritarios no solo contra la libertad de expresión, sino contra la libertad a secas.

El mal gobierno por designio o incompetencia es otro frente típicamente latinoamericano donde la prensa desempeña un rol de mayor relevancia que en otras zonas del globo.

Como es obvio, de esta función de ombudsman de oficio, de conciencia crítica y de detonador de escándalos, se deriva en buena medida la violencia de la que los periodistas son con lamentable frecuencia víctimas en América Latina. Por un lado, la prensa acota, denuncia, restringe e ilumina. Por el otro, carece de la fuerza, de la protección y de los recursos que pueden defenderla de los embates que su propia actuación suscita. De allí la extrema vulnerabilidad del periodismo latinoamericano. En un sentido estricto, ha asumido responsabilidades que le quedan grandes, ya que se haya totalmente desprovisto de los medios de todo tipo: institucionales, financieros, de seguridad y sociales, para realizar una misión en gran parte auto asignada. La consecuencia de este desequilibrio entre medios y fines, entre recursos y metas, entre exigencias propias y ajenas y la posibilidad real de satisfacerlas, es la violencia y la muerte. ¿Por qué mueren más periodistas que políticos en la mayoría de nuestros países? La respuesta tal vez yace justamente en esa desproporción entre la responsabilidad que, tácita o explícitamente, la sociedad le ha encomendado a nuestra

prensa, y los magros amparos de los que dispone para resistir los ataques que sistemáticamente se enderezan en su contra.

Lo que sorprende y horroriza en los seis ejemplos cuya pesquisa detallada y objetiva ha efectuado la SIP es el aviso previo de la muerte. Prácticamente todos los periodistas involucrados fueron amenazados; todos sabían que su vida corría peligro; ninguno mudó de hábitos, convicciones o postura para evitar un desenlace anunciado.

Mientras la prensa latino americana siga siendo llamada a ejercer una función como la que hemos muy rápidamente reseñado, la violencia en su contra persistirá. Y mientras no cuente con la fuerza, la eminencia cultural y los recursos que la resguarden contra esa violencia, seguirá sucumbiendo frente a las represalias de sus enemigos, adversarios también de la sociedad entera. El único antídoto reside en la sanción penal y social, el costo, si se quiere, de agredir a la prensa. El periodismo en América Latina no puede --por ahora o en un futuro mediato-- abdicar de sus compromisos y atribuciones; pero tampoco goza de los medios necesarios para proceder sin peligro. La solución provisional, hasta que transfiera parte su responsabilidad a otras instituciones, quizás más aptas para estos cometidos, inevitablemente consiste en el costo que le imponga a sus detractores y verdugos: que nadie permanezca impune por callar, amedrentar o asesinar a los periodistas de nuestra América.

Henos entonces inmersos en el tema toral de este esfuerzo encomiable de la SIP: la impunidad.

Es cierto que la impunidad de los crímenes en América Latina no se limita a los asesinatos de periodistas. El asalto en despoblado de la corrupción, las violaciones notorias y recurrentes a los derechos humanos, la estafa y la miseria son atracos a la dignidad humana que no le piden nada a las ejecuciones a sangre fría de los integrantes del mal llamado --por anémico-- cuarto poder. Pero nuevamente, la vulnerabilidad de este estamento específico de la sociedad es palmaria y excepcional. Se expone más que otros, pero tiene menos con que defenderse. Ello explica también la consternación que despierta la violencia ejercida contra los hombres y mujeres de la pluma, de la máquina de escribir y, ahora, del monitor. Se difunde siempre un sentimiento de desigualdad, de contienda dispareja: la víctima no es comparable al victimario, ni en fuerza, ni en maldad ni en cinismo.

¿Qué lecciones nos entregan los seis muertos que hoy recordamos y honramos? ¿Qué compromiso debemos asumir con ellos, y con tantos otros, caídos también procurando la verdad y justicia? Para empezar, la memoria: nada justifica el sacrificio, voluntario o no, de las víctimas como la perseverancia en la lucha por castigar a los culpables y por conservar el recuerdo de su tragedia. El olvido es la peor suerte que podrían correr Guillermo, Carlos, Héctor, Víctor Manuel, Jorge e Irma; su mejor contribución póstuma a la sobrevivencia de sus colegas hoy es la vigencia de su gesta.

Enseguida, debemos siempre reconocer que la mejor manera de evitar nuevos

martirios es mediante la lucha, no el silencio. Nada como una prensa sumisa o callada alienta a los asesinos de los colegas aquí recordados; nada como periodistas corruptos y sometidos fomenta la cultura de la impunidad. Llegará el día en que la prensa latinoamericana pueda portar una carga más a la medida de su fuerza y capacidad; pero ese día aún no arriba, ni está en puerta.

Para terminar, una palabra sobre el periodismo del que tratamos aquí, el de los medios impresos, investigativo y crítico, independiente y vigoroso. La modestia y el realismo nos obliga a señalar que los medios a los que nos hemos referido, son cada vez menos los que cuentan en nuestras naciones. Todas las tradiciones que hemos recordado; todas las bellas páginas que hemos evocado en estas notas, pertenecen a los medios impresos y, en parte, a un mundo que se va. En América Latina, como en ninguna otra región del mundo, la televisión, sola y triunfante, ha conquistado a las masas. Han sido una presa fácil, desprovistas como se encuentran en estas tierras de la costumbre o el aprendizaje de la lectura del periódico obrero del siglo diecinueve, de la hoja de opinión de las emergentes clases medias europeas entre las dos guerras, del diario de abolengo de las medianas urbes anglosajonas.

El verdadero reto de los medios y la libertad de expresión en América Latina reside en resquebrajar o abrir los monopolios televisivos, últimos y renovados bastiones de la censura, del oficialismo y de la manipulación en Iberoamérica. Como vamos, corremos el riesgo de ver acotadas las virtudes que aquí hemos exaltado, reducidas a manifestarse en pequeños espacios sin lectores, sin recursos, sin consecuencia. Es la próxima batalla, que todos anhelamos se pueda librar y ganar sin mártires, pero no sin combates ni valor. De no entablarla, perderemos lo que hemos ganado, y condenaremos a la indiferencia o al olvido a los colegas cuyas muertes la Sociedad Interamericana de Prensa ha rescatado, para orgullo de sus familias y amigos, y en honor del periodismo de América Latina.